



Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

CFP 4420/2019/4/CA2

Buenos Aires, 24 de mayo de 2024

"H., S. G.

s/prescripción"

J. 4 S. 7 - (c. n° 62.467 - V.B.)

Y VISTOS Y CONSIERANO:

I. La defensa de S. G. H. apeló la decisión del Magistrado de grado de fecha 26 de abril ppdo. que rechazó su planteo de prescripción de la acción penal.

II. Recordemos que se dictó el procesamiento del nombrado por considerarlo autor del delito previsto por el artículo 303, inciso 4°, del C.P. en 14 oportunidades y en concurso real.

Sin perjuicio de ello, en ocasión de requerir la elevación a juicio, el Fiscal de grado consideró que el relato fáctico atribuido -haber introducido al mercado, con el propósito de disimular su origen ilícito, la suma de \$ 888.989, correspondientes a la sumatoria de los valores declarados en los formularios 08 de 14 rodados adquiridos por el imputado-, configuraba un solo hecho que calificó como el descripto en el inciso 1° de la citada norma.

Ante ello, la defensa del nombrado señaló que *"bajo el ropaje de una mera divergencia con la calificación legal"*, se pretendía alterar de manera sorpresiva y extemporánea la plataforma fáctica fijada en el auto de



procesamiento para revivir así una acción penal que, en el caso de la mayoría de las adquisiciones imputadas a su pupilo, se encontraba fenecida. Consecuentemente, solicitó se decrete su prescripción.

Para zanjar esa discusión el *a quo* aludió a jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal que refiere que a los fines de evaluar este instituto debe estarse a la calificación más gravosa siempre que razonablemente pueda corresponderle y concluyó que a la luz de esos lineamientos, el ejercicio de la acción penal se encontraba vigente.

III. Al manifestar su voluntad recursiva, el impugnante destacó la íntima vinculación existente entre este planteo y su paralelo -nulidad del requerimiento de elevación a juicio-, e insistió en que el cambio propuesto por el acusador implicaba una importante mutación en el plano de los hechos con una consecuente repercusión en el cómputo del plazo.

En esa línea, descartó que se tratara de una discusión en torno a dos calificaciones igualmente válidas dado que una de ellas estaba vedada por implicar la reintroducción de aspectos fácticos ya abandonados al dictar su procesamiento.

IV. Ahora bien, antes de adentrarnos en la discusión planteada advertimos que surge un nuevo debate que, necesariamente, debe ser superado de forma previa a la resolución del presente y cuya ausencia empaña la validez de la decisión que aquí revisamos.

Surge de la lectura del presente incidente que los parámetros tenidos en cuenta al momento de resolver la vigencia de la acción penal fueron los fijados por la anterior letra del artículo 303 del C.P., sin evaluar la procedencia o no de la nueva versión de esa norma, que fue modificada por la ley 27.739 (publicada en el B.O. el 15/03/2024).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Así, en lo que a este caso concierne, cuando el inciso primero de esa figura legal exigía para su configuración superar el monto de \$ 300.000 (pesos trescientos mil), ahora requiere que la maniobra involucrada sobrepase el valor resultante de la suma de 150 salarios mínimos, vitales y móviles del momento del hecho.

Y si bien el inciso 4to. establecía para aquellos casos que no rebasaban ese valor fijado como base mínima la pena de prisión de seis meses a tres años, la formula actual reprime esta conducta con pena de multa de 5 (cinco) a 20 (veinte) veces el monto de la operación.

El escenario descripto exige, previo a examinar la subsistencia o no de la acción penal, determinar a qué versión del artículo 303 debe ajustarse el análisis, siguiendo los términos fijados por el artículo 2° del código sustantivo, en el entendimiento de que el principio de legalidad, de rango constitucional, debe ser interpretado de modo tal que no son aplicables las leyes penales de modo retroactivo, excepto que sean más benignas.

En el mismo sentido, el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional y las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integran el bloque constitucional, expresan con toda precisión el alcance de la irretroactividad de la ley penal y de la retroactividad de la ley penal más benigna.

Pues ese "*principio...surge como consecuencia de la idea de defensa social que sirve de base a la legislación punitiva; tal idea importa admitir que toda modificación de estas normas obedecerá a que el legislador ha encontrado un desajuste entre las leyes anteriores y los fines que perseguía al dictarlas, esto es, que la nueva disposición sirve mejor a*



los intereses que se busca tutelar y, por ello, debe ser esta última la que se aplique a los hechos que hayan de juzgarse después de su sanción" (Fallos: 323:3426).

Ante ese panorama, la ausencia de un razonamiento que permita vencer esta cuestión se proyecta en un claro y concreto menoscabo del principio de legalidad y de la garantía del debido proceso y dada la imposibilidad de reparar esa lesión mediante un remedio menos gravoso que el de la nulidad, habremos de disponer la anulación de la decisión puesta en crisis, debiendo el *a quo* emitir un nuevo pronunciamiento en los términos señalados *supra*.

Por ello, el Tribunal **RESUELVE**:

DECLARAR la **NULIDAD** de la resolución de fecha 26 de abril del corriente año, **DEBIENDO** el Magistrado de grado proceder de acuerdo en lo señalado en los considerandos.

Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase vía sistema informático.

